



---

## Tesis para el VIII Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT

*Presentadas por: Winston Petro Barrios, miembro del Comité Ejecutivo, a nombre de Notas Obreras*

### LA CRISIS ECONÓMICA

Colombia se está sumiendo en una profunda crisis económica, al punto que podría caer en la recesión. La economía se contrajo 0.3% en el último trimestre y en lo corrido del año (enero-septiembre) apenas ha crecido en 1%. De los 12 sectores que analiza el Dane los tres que más cayeron fueron la construcción, -8 %, la industria manufacturera, -6,2 %, y el comercio, -3,5%. La caída de la construcción es un pésimo síntoma dada su incidencia en otra serie de renglones. En tanto, los sectores que crecen como el agrícola y ganadero lo hacen a tasas excesivamente modestas, 1,8 %, y en el acumulado del año solamente 0,5 %. Mientras tanto la especulación financiera, aunque cayó en el último trimestre, en lo que va del año ha aumentado en un 8,8 %. Los principales renglones productivos decaen o apenas se mantienen, pero la usura se empodera. Tanto las exportaciones como las importaciones disminuyen aceleradamente, estas últimas resentidas en áreas como la importación de maquinaria y equipo lo que a su vez refleja del estancamiento de las labores productivas.

La inflación anual reportada por el Dane en octubre aún es de dos dígitos, 10,48 %, y la del año corrido de 8,27 %, lo que indica que al finalizar el año rondará el 10 %. Como esta fue de más de 13 % en 2022 se crea el espejismo de que los precios están cayendo, pero la verdad es que suben incluso más que en la mayoría de los

países de América Latina, acareando hambre y miseria a vastos sectores de la población que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y no acceden ni a una comida al día. Y el desempleo aún ronda el 10 % de la población económicamente activa.

Entre las causas principales de la debacle cabe mencionar la abrupta subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República, que solo en lo que va del gobierno actual han pasado de 7,5 % a 13,25 %, un alza del 77 %, que encarece los créditos para ahogar a conciencia la actividad productiva y la capacidad de compra y poner freno a la espiral alcista. Deprime, así, la economía nacional para sostener los valores financieros. Pero como las causas principales de las alzas de precios son principalmente externas, no internas, los intereses trepan, pero los precios apenas descienden. Se propone, además, atraer capitales, contrarrestar la tendencia a su migración tras los incrementos de los réditos en los Estados Unidos, que enfrenta también la inflación con la misma herramienta. Uncida la economía colombiana al dólar, sin remedio sufre las consecuencias de las políticas que allá se aplican y que toman en consideración únicamente sus particulares intereses. Los efectos de la recesión así provocada serán devastadores para millones de colombianos.

Mauricio Cabrera, columnista de *Cambio*, desdeña la “sorpresa” frente a la caída del PIB, cuando ese era “el objetivo implícito del Banco de la República al subir las tasas de interés: enfriar la economía para controlar la inflación.” Agrega que, si bien en el frenazo de la economía

influye la caída de la inversión, el punto determinante es la caída del consumo que, por su enorme peso en el PIB, golpea más el crecimiento que la propia disminución de la inversión.

Pero no hay prácticamente ningún renglón que no esté severamente golpeado. Las exportaciones han mermado en 15 % en lo que va del año, pero también las importaciones en porcentajes aún mayores, por lo que el golpe sobre la balanza comercial no ha sido mayor, lo cual sirve muy poco de consuelo, pues la reducción de las compras externas en buena parte se centra en maquinaria y equipo, lo que refuerza los indicios de lo honda y prolongada que puede ser la depresión.

Ante la inocultable evidencia del descalabro el presidente recurrió a su habitual sistema de comunicación, el trino. El 15 de noviembre, inmediatamente después de que el Dane publicara las cifras del tercer trimestre, escribió:

La economía en rojos: tenemos dos caminos inmediatos. A. Bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República. B. Profundizar la política anticíclica del gobierno: Aumentar (sic) la ejecución de la inversión pública.

Y unas horas más tarde, en la ceremonia de aniversario de la fuerza Aérea, planteó:

El Gobierno Nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica. Por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal, que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó, la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco la resuelve el Gobierno, la resuelve el Congreso de la República.

Al día siguiente, en el Congreso de Findeter en Cartagena, el director de Planeación, Jorge Iván González, se refirió a la otra cara del

mismo problema planteado por el presidente: la deuda pública.

La situación de 2025 es muy difícil de calificarla, es dramática, alarmante y es que vamos a tener servicio de deuda de \$112,9 billones por una inversión de \$68,8 billones, una diferencia de \$44 billones.

El director del DNP complementaba la intervención presidencial, exponiendo el misterio que subyace a las abstrusas formulaciones del primer mandatario: que el pago de la deuda hace que se reduzca la inversión pública, pues esta caerá, en 2025, según anuncia González, de \$97,7 billones contemplados en el presupuesto de 2024, a \$68,8 billones, es decir un 30 %. En tanto que el servicio de la deuda pasará de \$94,5 billones a \$112,9 billones. Así, mientras se les cumple a rajatabla a los agiotistas, a los fondos de inversión, a los bancos comerciales nacionales y extranjeros, a los fondos de pensiones, a la banca multilateral; la educación, la salud, las obras públicas, el bienestar de las masas y el apoyo a las faenas productivas sufren una merma de \$44 billones en solo un año, más de dos veces los ingresos de la reforma tributaria de 2022. He ahí la esencia de la regla fiscal.

Ante tan dramática situación descrita por tan altos funcionarios, le correspondió al encargado de Hacienda explicar que la respuesta oficial consistiría en... conversar:

La regla (fiscal) nos deja unas restricciones muy fuertes, porque tal como está diseñada, le da prioridad al pago de la deuda pública y no a la inversión pública. Lo que queremos cambiar es reducir los topes de deuda, sin dejar de cumplir con los compromisos internacionales. Cualquier modificación de la regla fiscal es un proyecto en el Congreso, no estamos radicando nada en el Congreso para modificarla. Es una polémica que tenemos que abrir para que en algún momento podamos mirar qué hacemos en la flexibilidad del pago de la deuda”.

Entonces, el presidente advierte que vamos a una catástrofe económica, pero que quien debe resolverla es el Congreso; el director de Planeación explica que el gobierno del Cambio hará una disminución sin antecedentes de la inversión pública para cumplir con el pago de la deuda, y el ministro de las finanzas afirma que apenas se trata de polemizar –seguramente al calor de un tinto– para ver si algún día se puede hacer algo; que no tienen ni pensado presentar modificaciones al respecto al Congreso, pero que, eso sí, no se dejará de cumplir con los compromisos internacionales. No es para sorprenderse, hace rato que el presidente y los altos funcionarios traídos a colación vienen comulgando con las ruedas de molino de la “responsabilidad fiscal”. Petro, en la campaña electoral de 2018, en la iglesia del Voto Nacional, para ganar el apoyo de Antanas Mockus y Claudia López, se inclinó ante los mandamientos que le pusieron al frente, entre ellos, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad fiscal que, de hecho, constituían una promesa a los mandamases y una apostasía a cualquier ideario de cambio.

En fin, la respuesta es el inmovilismo, una tara notoria que aqueja al gobierno, pues ni siquiera ejecuta a plenitud los recursos de que dispone. Ya hasta la propia vicepresidenta, Francia Márquez, señaló, en entrevista concedida a Cambio, su malestar, cansancio, frustración y vergüenza por ni siquiera haber podido arreglarle una carretera ni construido un acueducto a su comunidad, a pesar de su lucha dentro del gobierno. Qué decir de las amplias masas que cono razón se preguntan si “el cambio” es apenas una quimera o hasta un engaño burdo. La misma frustración siente, un dirigente tan leal a Petro como lo es Gustavo Bolívar: “siento un voto de castigo al Pacto Histórico”, dijo. La vicepresidenta culpa a “las trabas y las trampas del establecimiento (...) hechas para que nada pueda cambiar. Para cada acción hay un poco de trámites que dan vuelta por todas las instituciones, y eso hace casi que imposible tomar la decisión de invertir en un proyecto que le cambie la vida a una comunidad.”

Mucha razón tiene cuando menciona las trabas y las trampas del establecimiento que están hechas para que nada pueda cambiar. Ella y Petro advierten algo resabido por todos, que:

Incluso reformas pequeñas se enfrentan a un valladar que protege, con su constitución y sus leyes, su burocracia y su ejército, sus costumbres y sus mañas los intereses de los potentados, los cuales constituyen el precepto sagrado del Estado Social de Derecho, al cual Petro decidió uncir El Cambio desde su concepción misma. Y eso que reconoce que: “Yo no llegué al poder” “llegué fue al gobierno, porque el poder, el verdadero poder, lo tienen otros, los grupos económicos”. Y si sabía eso ¿por qué prometió un cambio recorriendo ese camino ciego? El hoy mandatario no solo se comprometió a acatar cada una de las disposiciones reaccionarias, sino que pretendió que las innovaciones se llevarían a cabo con el aval de los jefes retrógrados colombianos, de los gremios intocables, de los Estados Unidos y de sus organismos multilaterales. Vale decir, El Cambio petrista nació lastrado, contrahecho. Aunque muy lejos de tratarse de Prometeo, está encadenado, –con los hierros que le aherrojó su propio progenitor, Gustavo Petro– a la roca anquilosante de la república plutocrática. (Alfonso Hernández, Se petrificó El Cambio, Antípoda)

La vicepresidenta se queja de que los egos e intereses personales entraban al gobierno, es decir, la corrupción, y acusa a los ministros, sin parar mientes en que han sido nombrados por Petro y ella misma.

Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo señalan que el nepotismo y el bolígrafo se impusieron en la elaboración de las listas de candidatos del Pacto. De tal forma que los propios dirigentes petristas encuentran que los descabros del gobierno no estriban en su radicalismo, sino en su similitud con los poderes estatuidos. Incluso intelectuales, a los que puede acusárseles de todo menos de antipetristas, como es el caso de María Jimena Duzán, buscan hasta las más exóticas explicaciones para el desgobierno. Pero lo cierto es que Petro no logra salir de su laberinto, pues

atado al establecimiento no puede satisfacer en lo más mínimo al electorado. A lo único que atina, entre claudicación y claudicación, es a poner un trino provocador o a dejarse llevar por su estéril incontinencia verbal. No obstante, las fuerzas reaccionarias han elaborado con él la falacia del hombre de paja: le atribuyen posiciones ideológicas y políticas que le son ajenas. Lo presentan como un socialista convencido y consecuente a pesar de tenerlo ya plegado, y a sus obsecuencias le responden con mandobles y vilezas. Utilizan las promesas incumplidas y crean zozobra para propagar la imposibilidad de las transformaciones y la resignación ante el statu quo. (Alfonso Hernández, *ibid.*)

### **APLICACIÓN DE LA "POLÍTICA SOCIAL" DE LAS ENTIDADES MULTILATERALES**

Contrasta lo anterior con los mandobles que los mismos altos funcionarios anuncian contra las mayorías. También, a mediados de noviembre, Bonilla y González, este último en el mismo escenario del Congreso de Findeter, plantearon que, como una graciosa concesión a la ciudadanía de centenares de municipios y ciudades intermedias, el impuesto predial les subirá "apenas" entre 50 % y 300 %, por cuenta de la actualización catastral o del catastro multipropósito que subirá el avalúo de los predios hasta en 1.000 %, o más. La peregrina explicación consiste en que la población debe recibir con beneplácito semejante alza pues si esta se ajustara a lo que subirán los avalúos se llegaría a cifras aún mayores.

Igualmente, Bonilla anunció que la política iniciada desde la posesión del gobierno de elevar el precio de los combustibles —la gasolina ha subido, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, en 57 %— para ponerlos al mismo nivel del llamado precio de paridad internacional, y ajustarse aún más a la regla fiscal, continuará con el diésel desde comienzos de 2024. Esto, junto a la elevación de los peajes que, durante el primer semestre de 2024, tendrán dos alzas que sumarán alrededor de 23 %, pues habrá de aplicarse el IPC sumado de

2022 y 2023. Lo que alerta sobre la imposibilidad de que la inflación ceda ya que se ha demostrado que cada punto porcentual de alza de los combustibles repercute en un 0,085 % en el IPC.

A estas políticas se les suman otras en las que viene trabajando con denuedo el señor González: el Registro Social de Hogares y el Registro Universal de Ingresos, orientadas a "a mejorar la focalización de los subsidios en el país" y a "identificar a las familias más pobres y otorgar subsidios". Esto acompañado con el Plan Nacional de Desarrollo, que determinó eliminar los "subsidios" a los servicios de energía, gas, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3 a partir de 2027, pues según el director de Planeación hay 3,5 millones de hogares (unos 14 millones de personas) que reciben subsidios sin ser pobres o vulnerables.

Se trata, entonces, de que el gobierno de izquierda está tomando medidas que vienen exigiendo desde hace años el FMI, el Banco Mundial y la Oede, y que incluso los gobiernos oligárquicos no habían podido aplicar, por temor al alzamiento popular. De hecho, en el gobierno de Duque varias de ellas fueron impedidas por el estallido social de 2019-2021. En efecto, la Oede en el informe Colombia 2022, reitera el planteamiento de que la focalización del gasto es deficiente particularmente en los casos de las pensiones, la vivienda, los subsidios a la educación y los servicios públicos. Basada en los estudios de Fedesarrollo la organización de las "mejores prácticas", señala que en conjunto los llamados subsidios en un 60 % se les otorgan a "hogares no pobres" y que en los casos de la vivienda, los servicios públicos y las pensiones alrededor del 90 % de los que los reciben ni son pobres ni vulnerables.

### **LAS REFORMAS SOCIALES**

El gobierno, no sin antes someterlas a "concertación", llevó al Congreso las que se han llamado las reformas sociales: pensional, de salud y laboral. La de la salud suscitó el

temprano rompimiento de la versión inicial del “acuerdo nacional” y la brutal acometida de los poderes establecidos contra el gobierno. En cuanto a la laboral, los congresistas, bajo la férula de la Andi, ni siquiera aceptaron discutirla y el gobierno debió retirarla y volverla a presentar. Y la de las pensiones, aunque no ha tenido mayor trámite, es la única que ha contado con el beneplácito de los potentados, por lo que se le augura un buen suceso en el legislativo.

### **LAS EPS UTILIZAN SU INMENSO PODERÍO PARA HUNDIR EL INTENTO DE REFORMAR LA SALUD**

La de salud fue la primera del paquete y la que más polvareda ha levantado. Y no es para menos, pues está en juego el manejo de cerca de 90 billones de pesos, recursos del sistema provenientes del presupuesto y de las cotizaciones, dineros que las EPS han mangoneado sin control desde que se promulgó la Ley 100 en 1993. Allí reside la causa del desmonte a la poca prevención que existía; de las barreras de acceso, que han provocado la muerte de miles de colombianos; de la quiebra de la red pública y de los recurrentes escándalos de corrupción, al tiempo que un puñado de EPS se convirtieron en verdaderos monopolios que, al controlar las afiliaciones, manejan toda la información del sistema, definen el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y las tarifas por los procedimientos y exámenes, usan los dineros para conformar una red propia de prestadores –integración vertical–, hacen alianzas con IPS poderosas y condenan a la ruina a otras, públicas y privadas, de acuerdo a su conveniencia, de tal suerte que hoy les adeudan \$23 billones.

El proyecto inicial, radicado el 13 de febrero, les quitaba a las EPS el aseguramiento y el manejo de los recursos, por lo que estas junto con los gremios, la gran prensa y los partidos de oposición, se lanzaron, todos a una, contra el gobierno y su ministra Carolina Corcho señalando que se pretendía arrasar con la cobertura universal y el “mejor sistema de salud

del mundo”, contruidos a lo largo de treinta años. Los ministros neoliberales, José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, nombramientos con los que Petro buscó “tranquilizar a los mercados”, más el director de Planeación, así como los jefes de los partidos de la coalición de gobierno, se unieron al coro de los detractores. El 13 de marzo, en reunión con los jefes de los partidos Conservador y de la U, el presidente reuló y les ofreció un salvavidas a las aseguradoras y se comprometió a que recibirán un pago de 8% de la UPC por sus servicios, incluidos los de la auditoría de todo lo que se factura. Posteriormente les entregó la cabeza de la ministra Corcho. En adelante, las EPS se llamarán Gestoras de Salud y Vida y la puja ha sido por cuales facultades de las que han gozado conservan, y, por supuesto, las quieren todas. Lo único que hasta ahora tiene asegurado el gobierno es el pago directo por la ADRES a los prestadores. Las EPS aceptan que se fortalezca la atención primaria a través de los CAPS, pero quieren que estos, sean privados o públicos, queden integrados a las redes controladas por ellas. La privatización de la salud expresada en que el 83 % de los prestadores son privados, queda como algo intocable. Si la salud sigue siendo un negocio, ninguna fórmula servirá para conseguir, en la mayor medida posible, un sistema que mantenga sana a la población, objetivo que choca con los intereses privados, para los cuales el negocio es la enfermedad.

Proponemos, por tanto, el más amplio frente unitario para conseguir que la atención en salud sea un derecho de todo colombiano, que sea universal y gratuita y que el Estado la garantice en todos los niveles de complejidad. En la actualidad es necesario exigir los siguientes puntos mínimos:

- Otorgar a la inversión estatal en salud la máxima prioridad y que no se subordine a los ucases de los prestamistas nacionales y extranjeros plasmados en la regla fiscal.

- Erradicar a cabalidad la intermediación financiera. Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad

Social en Salud, Adres, les gire directamente a los prestadores y prohibir a los dueños de las EPS ahondar su control de clínicas y hospitales, mediante el uso de los dineros públicos de los que se han apropiado bajo los auspicios de la Ley 100. Trasladar el porcentaje que reciben las EPS a las instituciones públicas de salud.

- Exigir que el gobierno, de manera inmediata, invierta suficientemente en el fortalecimiento y la creación de centros de atención primaria.

- Demandar financiación estatal suficiente para los hospitales públicos de mediana y alta complejidad –nivel en el que los grandes inversionistas privados ejercen un monopolio casi completo–, los cuales deben recibir recursos provenientes no solo por la cantidad de pacientes atendidos. Sufragar los costos de los más avanzados equipos e instalaciones médicas, de la investigación y del personal requerido son condiciones *sine qua non* en la mejora del sistema de salud.

- Constituir instituciones estatales cuyo objeto sea la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.

- Construir ARL públicas destinadas a proveer los servicios a los trabajadores accidentados o que padecen enfermedades originadas en sus ocupaciones.

- Garantizar la autonomía médica y los derechos de la fuerza laboral de la salud, mediante salarios dignos, prestaciones sociales, estabilidad laboral, contratos a término indefinido, derecho de asociación, negociación colectiva y huelga.

- Impulsar la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, que son determinantes en el mejoramiento de la salud, tales como agua potable, descontaminación, erradicación de vectores, etc.

- El estado debe asegurar a través de las instituciones de educación superior públicas la formación de médicos, enfermeros y personal paramédico para cubrir la atención universal en todos los niveles y acabar con el negocio de la formación y la residencia médica montado por EPS y universidades privadas.

- Tomar posesión de las bases de datos para crear una única base nacional.

- Garantía estatal del transportes y la manutención de los pacientes –y sus acompañantes– que requieran ser trasladados a ciudades lejanas o así sea a cortas distancias, por razones de discapacidad, por carecer el lugar de origen de los centros asistenciales del nivel requerido.

- Exigir a las EPS el pago inmediato de las deudas a las IPS, especialmente a las Empresas Sociales del Estado, ESE (hospitales y demás centros de atención públicos). En caso de incumplir, embargarles los activos y destinarlos al financiamiento de la salud pública.

- Garantizar un sistema de crédito y de fomento a las IPS pequeñas y medianas y de estímulo para que en conjunción con el Estado impulsen la investigación.

- Construcción estatal de laboratorios fabricantes de insumos, medicamentos e instrumental médico. El estado debe fijar precios únicos de medicinas y procedimientos y unirse a la lucha mundial contra el monopolio de las patentes.

- Castigar ejemplarmente a los dueños de las EPS y de las IPS que pretendan sabotear los servicios de salud para impedir la reforma que reclama el pueblo colombiano. Estos deben ser llevados ante la Justicia y sus propiedades confiscadas sin indemnización.

## EL SISTEMA DE PILARES APUNTALA EL PREDOMINIO DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Aún no se han discutido profundamente las nefastas consecuencias que la reforma a las pensiones tiene para una buena parte de los asalariados del país, incluidos miles afiliados a la Central Unitaria. Lo primero que hubiera debido llamar la atención es el hecho de que destacados voceros de los magnates hayan expresado su complacencia con la reforma que, en mala hora, acompañamos a la ministra a presentar.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, en foro organizado por él junto con La República y el ministro Bonilla cuando dirigía Findeter, exaltó el diseño del sistema, la creación del fondo público de ahorro, y la eliminación del “arbitraje”, dicho sin tecnicis-

mos, la abrogación de la posibilidad de trasladarse a Colpensiones. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el *think tank* predilecto del empresariado, alabó el sistema de pilares y la supresión de los subsidios públicos. El mismísimo señor Santiago Montenegro, por años presidente de Asofondos, el más recalcitrante enemigo de Colpensiones, valga decir el mandadero de los grupos Aval y Empresarial Antioqueño, dueños de Porvenir y Protección, exaltó la unificación del sistema, pues acaba la dualidad y pone de presente la inviabilidad del régimen de prima media puro, y por eliminar, a partir del umbral, el “subsidio” a las “pensiones altas”. El propio señor Mauricio Santamaría, de la Asociación de Instituciones Financieras, Anif, remarcó el tope que se les pone a los “subsidios” y que los hace explícitos. El exministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, reconocido asesor de los magnates, llamó a que el Congreso archivara las reformas laboral y a que este y el gobierno se concentraran en la aprobación de la reforma a las pensiones “que es la única sobre la cual veo el nivel de consensos mínimo para avanzar”. El columnista proempresarial y profesor de Los Andes Marc Hofstetter, también advirtió que las reformas a la salud y la laboral no deberían estarse tramitando, pero que en cambio la que sí “asoma la cabeza” es la pensional que empuja el país “hacia uno más justo donde dejaríamos de darles mucho a unos pocos.” Michel Janna, del Autorregulador del Mercado de Valores pidió fortalecer el proyecto que representa “una oportunidad única” para mejorar las condiciones pensionales de los colombianos.

Cualquiera diría que se enloqueció el manicomio, ya que estafadores y estafados se benefician mutuamente o, más bien, el proyecto consiste en un enorme dislate que les saca las castañas del fuego a los tiburones financieros. Desde luego, junto a los encomios al nuevo sistema —craneado por el Banco Mundial, como lo ha reconocido hasta el presidente Petro— los tecnócratas advierten que deberán hacerse los ajustes necesarios, particularmente al umbral, es decir al tope de salarios mínimos a partir del cual el aporte ingresa exclusivamente a las AFP,

cuestión que no será muy enjundiosa ya que lo que llega al Congreso “nunca sale como entró”. Luego del consabido cabildeo, el umbral se ajustará a algún punto entre uno y dos salarios mínimos, lo cual no solo dejará satisfechos a los banqueros sino que los sacará gananciosos porque se librarán de responder por la garantía de pensión mínima, que pasa a ser responsabilidad exclusiva de Colpensiones; la parte proporcional de la pensión por la que responderán será paupérrima porque se basará en la tasa de reemplazo que actualmente reconocen las AFP, en el mejor de los casos de 25 % del ingreso base de liquidación, cuando Colpensiones otorga el 65 %; se les aumentará el número de semanas para otorgar el derecho; y, primordialmente, lograrán quedarse con el grueso del ahorro pensional de los colombianos, para continuar su negocio especulativo, incluidos los empréstitos al estado, ya que si bien en cuanto al número de cotizantes la mayoría devengan entre uno y dos salarios mínimos, desde el punto de vista de los aportes reales su participación es mucho menor. A manera de ejemplo, aunque de los afiliados totales a pensiones el 47,5 % devenga un salario mínimo, el capital aportado mediante sus cotizaciones apenas llega al 14,3 %. Por contera, el gobierno detiene el traslado masivo de las AFP hacia Colpensiones, que ha venido creciendo desde 2013, en la medida que crecía la conciencia sobre la trampa que significaba el régimen de ahorro individual. Dichos traslados han sido determinantes para que el aporte estatal por medio del presupuesto nacional para pensiones haya sido desde hace varios años más o menos un 3,5 % del PIB, una cifra realmente baja frente a los estándares internacionales y que incluye a los jubilados de los regímenes especiales.

Por el contrario, para la masa de los asalariados que tendrán el “infortunio” de ganar por encima del umbral que se fije, su pensión se reducirá abrumadoramente como lo demuestran todos los cálculos, incluidos los que se hacen con base en el presentado por el gobierno en el proyecto. Para no ir tan lejos, ya el 30 de noviembre, Asonal Judicial, filial de la

CUT, declaró la primera jornada de protesta y anunció un paro nacional contra la reforma. La central tiene la obligación de dar marcha atrás en su apoyo a semejante proyecto y anteponer los intereses de los trabajadores a los entendimientos con el gobierno

En cuanto al llamado pilar solidario, es evidente que este no tiene que ver con el régimen pensional, pues se trata de un pírrico subsidio, que provendrá del presupuesto nacional, y que el gobierno tasó en el equivalente a la línea de pobreza extrema, esto es, \$223.000, y que el presidente en campaña había dicho que sería de medio salario mínimo. Desde luego, esto no sacará de la terrible pobreza al 75 % de los viejos que no acceden a una pensión, pero sí cumplirá el propósito para el cual han sido establecidos esta clase de apoyos: menguar las presiones sociales. En cuanto al llamado pilar semicontributivo se trata de la entronización de los BEPS, que consisten en un miserable pago bimestral a cargo de Colpensiones a quienes no cumplan los requisitos para pensionarse.

### **EN MATERIA LABORAL, LOS PATRONES SOLO ACEPTAN REDUCIR AÚN MÁS LOS DERECHOS**

Debe reconocerse que el gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que, en términos generales, recoge una serie de justas reivindicaciones de los proletarios, fundamentalmente orientadas a recuperar parte de los derechos conculcados por las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002. Contempla, también, varias normas favorables atinentes a los derechos de negociación colectiva y huelga; el establecimiento de algunos derechos, bastante recortados, para los trabajadores de las plataformas tecnológicas y los jornaleros agrícolas, y darles forma de ley a las sentencias de las Cortes relacionadas con los procesos disciplinarios y la llamada estabilidad laboral reforzada.

Hacen parte del proyecto materias como convertir la contratación a término indefinido en regla general; subir las sumas indemnizatorias

en la terminación de los contratos sin justa causa; la incorporación de la ley presentada por Uribe de reducción de la jornada semanal y aprobada por las Cámaras en 2021; limitaciones a los contratistas y subcontratistas y a las Empresas de Servicios Temporales para reemplazar labores permanentes o misionales y reducir la paga; impulso a la negociación por rama económica; extensión de los acuerdos convencionales a niveles inferiores del sector económico correspondiente; disminución de las trabas para extender las convenciones a los trabajadores no sindicalizados; prohibición de los pactos colectivos y los contratos sindicales; legalización de las huelgas en los llamados servicios públicos esenciales y de sus modalidades parciales, políticas y ambientales, ampliación de su duración y reducción de las causales de ilegalidad de la huelga contractual; ampliación de los términos de prescripción para las reclamaciones judiciales de derechos conculcados, e imprescriptibilidad de los que tienen que ver con la seguridad social, entre otras normas progresivas.

La patronal puso el grito en el cielo y delegó, principalmente, a la Andi y a su presidente, el señor Bruce Mac Master, para combatirla; los “centros de pensamiento” y los tecnócratas clamaron contra tanto atrevimiento; hasta el “estatal” Banco de la República se sumó al coro de los poderosos, que posan de defensores de la creación y la formalización del empleo, lo cual no se lograrían si se aprobaran tales disposiciones, incluso dijeron el “número exacto” de puestos que se “destruirían”.

Mac Master reunió las objeciones, entre otras, las siguientes: que lo que toda reforma laboral debía contener como asunto primordial era la superación de la informalidad, que tiene como causas el altísimo salario mínimo, los altos costos no salariales, la reducida acumulación de capital; además, que es incomprensible hacer tales exigencias a los “empleadores” en medio de tan bajas tasas de crecimiento mundial y nacional. Y sumó las siguientes objeciones: que el proyecto sube sustancialmente los costos laborales; dificulta la contratación; desconoce



los procesos productivos y tendencias de la economía moderna; elude la problemática de la población inactiva y las necesidades de flexibilidad de los hogares modernos que “optan” por el trabajo parcial; que no se enfoca en aumentar la productividad laboral y, por el contrario, restringe la automatización y la aplicación de los desarrollos tecnológicos que la afianzan. Además, que afecta “el núcleo esencial del derecho al trabajo”, incluidos la libertad de empresa, la iniciativa privada, la autonomía de la voluntad, la libre competencia, y de trabajo, y hasta los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga.

Resulta difícil encontrar un mejor ejemplo que este de la estulticia, por decir lo menos, de quienes cifran sus esperanzas de alcanzar las exigencias obreras, así sean modestas como las del proyecto oficial, en las ligerezas de la concertación y el acuerdo nacional con los opresores. Y sobra decir que será muy poco lo que salga del Congreso de los puntos presentados. El Congreso mayoritariamente cerrará filas contra los puntos principales y, si acaso, por guardar las apariencias, aprobará uno que otro punto secundario a cambio del mayor número de gabelas.

### **DE NUEVO EL FRACASADO SISTEMA DE COMPRARLES TIERRA A LOS TERRATENIENTES PARA HACER LA REFORMA AGRARIA.**

El presidente y la ministra de agricultura lanzaron en Sincelejo, el 3 de agosto pasado, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, basado en la ley 160 de 1994, cuyo principal redactor fue el defenestrado exministro José Antonio Ocampo, la cual tiene como eje “el mercado asistido de compra de tierras” propuesto por el Banco Mundial. Palabras más palabras menos, el presidente dijo en ese acto que para lograr el anhelo de que la tierra sea para el que la trabaja les estaba diciendo a los 5.000 grandes hacendados del país: “véndanos la mitad de la finca”, que la plata para comprársela está en el Ministerio de Agricultura, \$5 billones cada año, de 2024 a

2026, que además, les daría el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, para que pudieran tener más vacas en la otra mitad de la hacienda. Les damos más plata para que sean más ricos, anunció paladinamente. Y así gana el hacendado porque se vuelve más rico y gana el campesino porque puede producir en tierra fértil. A eso le hemos llamado un acuerdo nacional, concluyó. (Presidencia de la República, *Palabras del señor presidente Gustavo Petro en la Asamblea Popular Campesina para la Reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural*)

En efecto, según el último censo agropecuario nacional, efectuado en 2014, existen en Colombia unos 4.200 latifundistas que son dueños de casi 27.000.000 millones de hectáreas, mientras que 1.550.000 familias poseen apenas 1.973.000 hectáreas. El 0,19 % de los propietarios posee el 52,6 % de la tierra, mientras el 72 % de los propietarios tienen apenas el 3,88 % de la tierra agrícola y pecuaria. Los 4.000 grandes terratenientes poseen 14 veces más tierra que 1,5 millones de familias campesinas pobres. Ese es el viejo drama del campo colombiano, tierras feraces sin hombres, y hombres sin tierra pero ávidos de trabajar y producir.

De acuerdo con los cálculos del propio presidente, y los que hizo la exministra Cecilia López, la hectárea se puede comprar entre \$10 millones y \$20 millones. Promediando, en el mejor de los casos el estado adquiriría con los \$15 billones presupuestados máximo un millón de hectáreas, las cuales servirían para dotar de una unidad agrícola familiar promedio a unas 50.000 familias, y eso sin contar con el cúmulo de inversiones necesarias para hacer viable su explotación económica, ni con la arraigada tradición de los terratenientes que, en las numerosas ocasiones en que se les ha ofrecido comprarles los fundos para hacer reforma agraria, se las han arreglado para enflautarle al estado bien caras sus tierras más malas. En esas condiciones, la compra de la tierra para dársela al que la trabaja tardaría cerca de 100 años. Es decir, que el acuerdo nacional beneficiaría, una vez más, a los amos del campo.

## LA MARTINGALA DEL GRAN ACUERDO NACIONAL

El portavoz del Cambio eligió para gobernar la fórmula del acuerdo nacional, cuya segunda versión se inició el 21 de noviembre en La Heroica, en una muy publicitada reunión con buena parte de los cacaos y con la invitación a tomar el tinto a Palacio al inspirador de los 6.402 falsos positivos.

El primer intento, con el que se inició el gobierno, consistió en la declaratoria como partidos de gobierno de las rancias colectividades liberal y conservadora y uno de sus vástagos, el Partido de la U, además del Pacto Histórico y del Partido Verde. Así, la demolición del neoliberalismo, pregonada por el nuevo gobierno, se iniciaría de la mano de César Gaviria Trujillo, quien lo implantó. Al gabinete fueron llamados Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López y otros de no tanto renombre como voceros del conservatismo y de la U, tanto en el gabinete como en otros cargos de postín. El trio citado tenía el objeto de darles tranquilidad a los mercados “ese ente misterioso y tiránico que, como los dioses del Olimpo, siempre está exigiendo sacrificios, señales tranquilizadoras y la más sumisa obediencia, según aseguran las pitonisas de nuestro tiempo, los CEO (directores de empresas), los MBA (magísteres en administración de negocios) y otros expertos y peritos, plumajes todos con los que se revisten los desplumadores de naciones.” (Alfonso Hernández, *Petro y el II Gran Acuerdo Nacional, Antípoda*)

El intento se malogró porque los ministros aliados se convirtieron en quintacolumnistas de los enemigos de las tímidas reformas planteadas, y los congresistas elegidos por los partidos de la coalición, llevados de la mano por las EPS, declararon anatema pretender quitarles siquiera un solo peso de los ingentes recursos públicos y de los aportes de los asalariados que por sí y ante sí estas entidades intermediarias declararon de su propiedad. El presidente rompió la

coalición, defenestró a los agentes de los mercados, les redujo en algo la dosis de almíbar a los partidos amigos, y lanzó la idea de que lo que pretendían los grandes poderes económicos y políticos y la gran prensa, los hasta hacía poco compañeros de viaje del Cambio, era propiciar un golpe de estado blando. Llamó a defender las reformas sociales en las calles, trino más radical y asiduamente, pronunció encendidos discursos en el balcón que da a la Plaza de Armas, pero no tomó ninguna medida concreta que en realidad produjera un cambio en la situación.

Ahí fue Troya. La cúpula oligárquica lo acusó de lo divino y lo humano, de querer incendiar el país, de devastar la economía y ahuyentar a los inversionistas; le declararon la guerra por medio de las Cortes, el Congreso, la Fiscalía y la Procuraduría. Los medios de comunicación de los magnates le endilgaron delitos nunca cometidos por el mandatario y exprimieron las indelicadezas de los amigos y allegados de fuera y de dentro del gobierno. Este quedó acorralado, empezó a derrumbarse en las encuestas y sufrió una innegable derrota en las elecciones territoriales, que el presidente con esfuerzos dignos de mejor causa ha pretendido convertir en un triunfo casi inobjetable. Le habría servido mucho más asumir autocriticamente los resultados, como lo hicieron varios de sus leales seguidores y como con seguridad lo piensan millares de cuadros políticos que se jugaron todo por su elección y que honestamente desean luchar por una verdadera transformación de la sociedad.

Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, el presidente, contrito, pergeñó que la mejor cura para el fracasado primer acuerdo nacional era proponerle una segunda versión corregida y aumentada a los mismos que lo sabotearon en el primer intento. Como era de esperarse, los destinatarios del cortejo se han puesto retrecheros; así lo demuestra la desapacible reacción de César Gaviria.

Pero eso al presidente no lo desanimó, y decidió proceder por lo alto. Invitó a buena parte de los magnates criollos a la Casa de

Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, en donde estos, encabezados por don Luis Carlos Sarmiento Angulo, le cantaron la tabla sobre cómo el logro de las aspiraciones del programa de la Potencia Mundial de la Vida pasa por garantizarles y apoyarles en contante y sonante sus especulaciones en las pródigas selvas y feraces tierras y los fecundos yacimientos del Chocó; permitirles la toma de la altillanura oriental; convertir en sujetos del crédito a los emprendedores de la economía popular. Y todos pensando en sacarle el mayor provecho a los grandes negocios y negociados que se tejen en torno a la economía verde. De acuerdo con el “técnico” informe presidencial se trabajó en “temas como la educación, la productividad, el desarrollo productivo de la tierra, el empoderamiento de la economía popular, la inclusión financiera, inclusión territorial, con énfasis en el Pacífico, la Guajira y la Orinoquia colombiana.” En fin, el Acuerdo Nacional 2.0, o como quiera llamársele, servirá ante todo para que los banqueros y otros magnates se enseñoreen aún más de la postrada Colombia. Ya la directora del Departamento de la Prosperidad Social, doña Laura Sarabia, exhibió en la península de la Guajira al heredero del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, como redentor de las comunidades postergadas.

El acuerdo se hizo extensivo a Álvaro Uribe, por quien el presidente ha mostrado una especial predilección a lo largo de su mandato, y que este ha respondido con algunas carantoñas como la de reprender en público a algunos de sus seguidores cuando le pierden el respeto a la majestad presidencial. Pero luego de la cena y el tinto, y desde los propios jardines de la Casa de Nariño, los seguidores de Uribe peroraron con bríos redoblados contra la reforma a la salud, y el propio prócer del Ubérrimo exclamó que en Palacio no había habido un diálogo sino un debate sobre la inconveniencia de la reforma a la salud.

Para completar, los verdes que hasta ahora votaban divididos las iniciativas oficiales ahora ni siquiera se prestan a hacer el cuórum pues fueron recusados y demandados como resultado

de que el ministro Jaramillo les echara en cara la avivatada de disfrutar de las mieles de los altos cargos oficiales al tiempo que se oponen ferozmente a las iniciativas del gobierno.

Podría decirse que el segundo Gran Acuerdo Nacional prácticamente nació muerto. Y como los de abajo han recibido el trato descrito arriba y tienen sobradas razones para detestar a los invitados a Cartagena, el pacto tampoco podrá contar con ellos, o quizás con algunos muy pocos, interesados en el disfrute de los carros oficiales.

### LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DEL CAMBIO FRENTE AL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

La principal característica de la situación internacional es la disputa creciente entre los Estados Unidos y la República Popular China, y dentro de esta el hecho de que la potencia occidental, llevada de su vano propósito de recuperar la hegemonía, se ha convertido en el principal peligro para la paz mundial.

La posición de Washington puede sintetizarse en el discurso pronunciado el pasado 13 de septiembre en la Universidad de John Hopkins, en Washington, por el secretario de Estado, Antony Blinken, que tituló *El poder y el propósito de la diplomacia estadounidense en una nueva era*. En este reconoce que quedó atrás la época de la unipolaridad estadounidense y expone los grandes rasgos de la estrategia actual de Estados Unidos. Empieza por manifestar que China, acompañada de Rusia, representa “el mayor reto” a largo plazo dada su aspiración de reformar el “orden internacional” e imponer el predominio de la “autocracia”. Los gringos, de acuerdo con su autodeclarada superioridad, se arrojan a definir quién pertenece al campo de los demócratas y quién al de los autócratas.

El secretario de Estado cita como otro elemento de la crisis, la pérdida de fe de pueblos y países en el orden económico internacional dizque por los subsidios, las nuevas tecnologías,

el robo de la propiedad intelectual, las prácticas que distorsionan “los mercados”, las desigualdades; pero, claro, no por las miserias que ellos mismos han esparcido entre los obreros, los pueblos y países desde que su país se erigió como el mandamás del planeta, y en las últimas décadas con el traslado de ramas enteras de la producción en busca de mano de obra y recursos naturales baratos.

La solución a la crisis, plantea, en primer lugar está en que los Estados Unidos se unan, porque “no hay nación sobre la tierra con mayor capacidad para movilizar a otros en busca de una causa común”, es decir, el remedio está en manos del causante de la enfermedad, dada su “excepcionalidad” obtenida casi por gracia divina. Propone un mundo de individuos libres, en el que cada nación escoja su destino, en el que la economía se defina por la “competencia justa, la apertura, la transparencia, en el que crezca la economía pero en el que muchas compartan los beneficios de ese crecimiento; en el que se impongan “los más elevados estándares” laborales, ambientales, de salud, educación, infraestructura, tecnología, seguridad y oportunidades”, donde se acaten los principios centrales de la carta de la ONU, se respeten los derechos humanos, un mundo en fin en el que los Estados Unidos guiados “por un sentido de ilustrado autointerés”, simultáneamente beneficien a la humanidad. En fin, que si en la nueva era son servidos los intereses del Tío Sam el mundo se beneficiará.

Agrega que el centro de la estrategia será “revitalizar y reimaginar” las alianzas y asociaciones para superar las tres grandes pruebas de la nueva era: “la competencia estratégica, feroz y duradera; los retos globales y amenazas existenciales y de carencia de medios de subsistencia por doquier, y la necesidad de rebalancear nuestro futuro tecnológico con nuestro futuro económico.” Para ello, dice, aplicarán el principio de “geometría variable”, consistente en identificar los problemas y ensamblar la red de alianzas adecuadas para enfrentar dicho problema. Esto no siempre se hará con las “democracias”, sino que trabajarán

con “cualquier país, incluidos aquellos con los que tenemos discrepancias en asuntos importantes (...) Esto implica algo más que asociarse con los gobiernos nacionales, también con los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los ciudadanos, especialmente los líderes jóvenes.” En síntesis, se aliarán con cualquier régimen que se preste a combatir a China y a Rusia y para ello pasarán por encima de los intereses nacionales y se aliarán con gobiernos locales, académicos, empresarios, líderes juveniles. Una amenaza abierta de subvertir y desmembrar a los países que no se allanen a sus intereses. Vieja política, que el también demócrata Clinton pregonó para desmembrar Yugoslavia. En nuestro país esta labor disolvente se adelanta, por ejemplo, con la creciente influencia que organismos como Open Society, las fundaciones Ford y Rockefeller y otros tentáculos de los pulpos financieros norteamericanos, ya tienen en los mundos académico, de organizaciones juveniles y populares, y hasta en la propia vicepresidencia y los ministerios de la Igualdad y de Educación.

Señala también que están fortaleciendo la Otán, incrementando las inversiones en defensa, transformando el G7 en el “comité directivo de las democracias”; llevando las relaciones con Japón “a un nuevo nivel”; igualmente con Corea, Israel y el Medio Oriente – en esta región todo indica que su estrategia le fracasará, quizás por largo tiempo, debido a la criminal agresión a Palestina por parte de Israel, su gendarme, lo que le ha enajenado el respaldo del mundo árabe y musulmán, incluida Arabia Saudita, a la que venía tratando de embozalar a un acuerdo con el estado sionista—. Alardea igualmente de la creación de nuevas bases en Australia y Filipinas y de sus asociaciones con Vietnam e India, y de cómo en “su” propio hemisferio está trabajando con 20 países en pro de una migración “segura, ordenada, humana”.

Es claro el propósito de cercar a China y de desatar la guerra mundial si la floreciente República oriental o Rusia u otra potencia no se le subordinan. Y esto lo remarca advirtiendo

que cualquier ataque al orden internacional (el suyo) afectará a la gente de todos los lugares como lo demostró “la invasión de Rusia a Ucrania”, en últimas, que se involucrarán en todo el planeta, en cada conflicto que ellos mismos avivan a diario.

En el terreno económico plantea que sus alianzas con Europa, Canadá y Asia “afilan las herramientas” para contrarrestar la “coacción” china, construir cadenas de suministro “resilientes”, sobre todo en las áreas tecnológicas clave, por ejemplo, el control de materiales y minas vitales para las nuevas tecnologías.

De otro lado, China, no exenta de culpa, no tiene alianzas militares, solo posee una base militar en el extranjero —Estados Unidos tiene más de 800—, pero este, incapaz de competirle económicamente, recurre a las armas, a provocar disturbios acá y acullá, a amenazar la paz global. Y ante la competencia desatada por China en áreas como la construcción de infraestructura a través de la nueva ruta de la seda, se propone llenar ese vacío que China está llenando con proyectos que la Casa Blanca califica de ambientalmente nefastos, mal construidos, donde predominan la corrupción y el abuso a los trabajadores y la trampa de la deuda. Podría decirse, para no ahondar en tanto cinismo: de *te fabula narratur* (la fábula habla de ti). Y anuncia, entonces, inversiones billonarias por doquier en carreteras, vías férreas, redes de internet, energías verdes. También enumera sus acuerdos en el terreno tecnológico, en la inteligencia artificial, determinante tanto en materia económica como desde el punto de vista del espionaje y la guerra.

Habló también del fortalecimiento de las instituciones internacionales (FMI, BM, ONU, OMC) proponiendo hacerles algunas concesiones —como mayores préstamos del FMI y el BM— a los países del sur global, resentidos por las altas tasas de interés, la rediviva crisis de la aplastante deuda, el cambio climático, la depresión de sus economías. Esto también planteado explícitamente como una manera de

alejar a dichos países de Moscú y Pekín, que se empeñan en reescribir o “destruir los pilares del sistema multilateral.”

En fin, el discurso transpira guerra por todos los poros, sed de sangre. Por lo que aplacar el guerrerismo norteamericano se convierte en la más urgente necesidad de los obreros y pueblos del mundo. Hay que rechazar sus bases militares; corresponde negarse a convalidar sus acciones contra otros pueblos y naciones; se debe desenmascarar a quienes trabajan a sueldo de entidades o fundaciones norteamericanas, unirse a pueblos y gobiernos amigos de la paz y la soberanía. No se puede proclamar a Colombia como potencia mundial de la vida y a la vez ser connivente con quienes erizan el planeta de armas, incluidas las nucleares.

## LA PELEA POR AMÉRICA LATINA

En América Latina los Estados Unidos perciben que están perdiendo el control con su nuevo rival. El comercio de la parte sur del hemisferio con China ya superó los USD 300 mil millones. Exceptuando a México y Colombia, China es ya el principal socio comercial de todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, el 27 % de las exportaciones de Brasil van a China, en tanto que solo el 4 % se dirigen a Estados Unidos y, en cuanto a sus importaciones el 23 % provienen del coloso de Oriente, y el 18 % de la potencia del Norte. El “patio trasero” se ha crecido en importancia en la reyerta. Latinoamérica alberga muchos de los tesoros perseguidos para el control de la moderna producción de punta. El conocido como triángulo del litio compuesto por Argentina, Bolivia y Chile alberga los mayores yacimientos de litio del mundo, en los que se calcula se harán inversiones por USD 40 mil millones de aquí a 2030. Chile y Perú tienen en sus entrañas dos quintas partes del cobre del planeta, y actualmente son la fuente del 40 % de la producción global; se calcula que tras el control de esta riqueza se harán inversiones de USD570 mil millones de aquí a 2040; México, por su parte, es el mayor productor

mundial de plata, metal clave para la producción de turbinas eólicas y paneles solares.

Como la disputa se ha trasladado a esos filones de negocios, se ha vuelto crucial el control de las fuentes de agua, de las selvas, de los yacimientos de metales de tierras raras, determinantes en la competencia de las nuevas tecnologías y energías verdes, en la inteligencia artificial, en la robótica. De ahí que el Fondo Monetario Internacional y demás agencias multilaterales, que antes exigían de todo a cambio de los empréstitos, desde privatización de empresas públicas y de la seguridad social, abaratamiento de la mano de obra, entrada franca a sus capitales y mercancías, ahora no solo quiere tanto, sino que quiere más.

Por lo que Washington viene refrescando la relación con el subcontinente a través de una suerte de diplomacia militar, cuya cabeza más visible es la general Laura Richardson, jefe del tristemente célebre Comando Sur. A Colombia, durante el mandato de Petro, ya ha venido en tres ocasiones, y en distintos foros y entrevistas ha expresado el renovado interés por su vecindario. Se solaza señalando cómo Suramérica posee el 31 % del agua dulce del planeta, el triángulo del litio, crudos pesados y livianos, elementos de tierras raras, la Amazonía. Menciona que su país ha sufrido una especie de ceguera respecto al sur global, lo que le ha traído funestas consecuencias como que de los países de América Latina, acuciados por la pobreza, 21 ya han firmado la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China, que está tomando una ventaja estratégica en la región afectando directamente la seguridad nacional estadounidense. Con desazón reconoce que en uno u otro país de la región Pekín construye ferrocarriles, autopistas, redes de telecomunicaciones, metros, como lo hace en Asia, África y hasta en Europa desde hace entre 5 y 10 años. Para asombro de quien la escucha la general Richardson le añade a sus peroratas, como lo hacen Biden y Blinken y otros altos funcionarios imperiales, la advertencia de que los países de Suramérica pagarán esto cayendo

en la trampa de la deuda y “entregando algo en términos de su soberanía.” O sea que la América del sur del río Grande deberá cuidarse de que otros cometan los mismos desmanes que ellos han irrogado en estos lares por más de un siglo. (Ver, *Southcom Leader Talks About Latin America*, *Aspen Security Forum*, Courtesy Video Defense.gov, 07-20-2022)

El presidente Petro en una de las visitas de la general anunció que le había pedido helicópteros y soldados a los Estados Unidos para “proteger” de la deforestación la selva amazónica. Por eso no extraña que el primer mandatario de los colombianos haya decidido viajar a Washington, el pasado 3 de noviembre a asistir a la primera cumbre de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP, por su sigla en inglés), iniciativa lanzada por Biden, a la que asistieron “los 11 socios más cercanos a Estados Unidos en el continente americano” (Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) la cual se realizó simultáneamente con un foro de inversión promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Antes de abordar el avión, el presidente hizo la siguiente declaración:

Una sólida alianza entre Estados Unidos y América Latina es vital para promover los valores compartidos del hemisferio y el compromiso con las libertades fundamentales en las Américas. Colombia está dedicada a fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible en la región, y a alinearse en esfuerzos concretos para abordar desafíos como el cambio climático, el acceso a agua potable, y la migración. (El Tiempo, *Alianza entre EE.UU. y la región es vital, dice Petro antes de Cumbre en Washington*, 02-11-2023)

La enormidad de llamar a América Latina a aherrrojarse a Estados Unidos para promover “los valores compartidos” y defender “las libertades fundamentales” se constituye en un acto indecible de sumisión. Empero, esto refleja uno de los rasgos políticos más sobresalientes

del jefe del estado: alinearse abiertamente con la Casa Blanca como una especie de seguro para sus reyertas internas. Palmariamente lo expresó su exministra de salud Carolina Corcho:

Un sector de las élites de los EEUU ligadas al Partido Demócrata coincide con los planteamientos del actual gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro (...) Estados Unidos ha sido el aliado histórico de las bicentenarias élites colombianas; es toda una paradoja que hoy Gustavo Petro esté más cerca de Biden que aquellos quienes amparados en el tío Sam cosecharon privilegios sembrando desigualdades. (Carolina Corcho, *Petro más cerca de Biden que las elites tradicionales de Colombia*, Revista Sur, 12-06-2023)

Dejando sin comentar la fanática apreciación de la doctora Corcho de que son las elites de Estados Unidos las que coinciden con nuestro presidente, volvamos a la cumbre de la Apep. En su instalación Biden, entre otras conminaciones, les dijo a sus huéspedes que sus “vecinos más cercanos” estaban obligados a escoger entre la diplomacia de “la trampa de la deuda”, es decir, China, y el enfoque “transparente y de alta calidad” de los gringos en materia de inversiones en infraestructura y desarrollo.

Pero fue en el foro con el BID donde los voceros estadounidenses expusieron con mayor claridad los objetivos de la novísima Alianza. La encargada de hacerlo fue la secretaria del Tesoro, Yaneth Yellen, quien advirtió que se estaba ante la oportunidad única de diversificar la cadena de suministros; que los Estados Unidos están trabajando en el “*friendshoring*”, esto es, en diversificar la cadena de abastecimientos a aliados y socios confiables, y que los países de la Apep están bien posicionados para beneficiarse de esto; habló de las perspectivas de monumentales inversiones en la manufactura de tecnologías eólicas y solares usando el litio extraído localmente; en el sector de la salud, el equipamiento médico y la farmacéutica; en los semiconductores. Pero no solo habló de los negocios de las tecnologías de

punta, sino de los más convencionales pero también altamente rentables de la “infraestructura sostenible”: puertos y aeropuertos modernos, redes de energía “limpia” y sucia, autopistas, infraestructura digital. Además de otras áreas, entre las cuales destacan los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio, la logística, las “buenas prácticas” regulatorias y la no imposición de barreras arancelarias. Claramente, una nueva embestida aperturista para franquear totalmente las puertas de los “aliados” a la prosperidad económica de los monopolios gringos. También se hicieron otros compromisos en aras del interés de Washington. Por ejemplo, se acordaron unos ínfimos créditos no reembolsables para los países donde se concentra el mayor flujo de migrantes, de tal manera que se les disuada, cual guardias fronterizas, de seguir al norte. En resumen, la señora Yellen explicó el papel de peón de brega que Estados Unidos le asigna a América Latina y el Caribe en la disputa global.

También se ocupó la cumbre de dos aspectos en los que las elites gringas “coinciden” con el jefe de estado colombiano: los intercambios de deuda por naturaleza y las reformas a las entidades multilaterales, el primero, asignado directamente al Departamento de Estado —lo que indica su marcado signo geopolítico—, el cual anunció la creación de un fondo especial en el BID para facilitar dichos negocios. Y el caso paradigmático es la torticera entrega de las islas Galápagos del Ecuador, llevada a cabo por la derecha rancia de Lasso, que a cambio de la rebaja de una parte mínima de la deuda externa, entregó por casi 20 años este tesoro de la geografía global a una cuadrilla de conglomerados, fundaciones y ONG imperialistas. Mismo destino que le espera a Colombia, si el curubito oficial les sigue pidiendo a los gringos que nos patrullen la Amazonía. En cuanto a los cambios en el FMI, el BM y otras entidades multilaterales de crédito, consistente en implorar que el primero emita a borbotones o utilice los llamados Derechos Especiales de Giro no usados por las grandes potencias con el mismo fin de alivianar la carga

de la deuda, debe anotarse que a la cumbre también asistió la primera ministra de Barbados, doña Mia Amor Mottley, quien se ha convertido desde hace unos años en la verdadera estrella fulgurante de estos planteamientos, alrededor de los cuales se constituyó, a comienzos de 2022, la llamada Iniciativa de Bridgetown. Embelecos que no resuelven sino que profundizan y prolongan el martirio del endeudamiento.

Los incontrastables hechos señalados en este acápite muestran que frente a la causa principal del abatimiento económico, político y social de Colombia: el dominio del imperialismo norteamericano; el actual gobernante de los colombianos, se ha convertido, como todos sus antecesores del siglo XX y lo que va del XXI, en otro devoto de la doctrina del *respice polum* (mirar al norte), promulgada por el camandulero Marco Fidel Suárez.

Es por ello, no hay duda, que en reciprocidad, los Estados Unidos se han mostrado solícitos en apoyar al presidente Petro en las diferentes crisis por las que ha pasado su mandato. Así lo hizo, entre otras ocasiones, cuando el novelón de Sarabia y Benedetti; lo mismo cuando la vicepresidenta sufrió los aberrantes ataques clasistas y racistas alrededor del uso de las naves oficiales, sobre lo cual la Embajada hizo un pronunciamiento inusual tratándose de un asunto de política interna, y, finalmente, con la escogencia de Colombia como uno de los favoritos en la nueva Apep.

## LA SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRETO Y SINDICAL

Hay que partir de que los desarrollos de la situación mundial, empezando por las exacerbada competencia por los mercados, por las fuentes de materias primas y de mano de obra barata tendrán consecuencias no vistas a lo largo y ancho del globo. Las descomunales inversiones que se anuncian en todos los confines harán que el capitalismo descomponga todas las estructuras socioeconómicas anquilosadas, al campesinado, haga que florezca el obrerismo en todas partes y este “se hará

sentir en grande”, incluso en las metrópolis donde saltará al escenario de la lucha de clases con fuerza inusitada. La confusión y el debilitamiento sufrido durante la globalización, con el desarraigo de las industrias y el outsourcing, que han contribuido a que enormes núcleos de la clase obrera apoye salidas derechistas recalcitrantes, pasarán como cualquier otra pesadilla, y su contradicción con el capital aflorará más diáfana en la “nueva era” del *reshoring*, el *nearshoring* y el *friendshoring*, los vocablos inventados por los teóricos imperialistas para significar el retorno de sus industrias y capitales a sus tradicionales zonas de influencia, incluidas las propias metrópolis, luego de las décadas de “deslocalización”, durante las que se conculcaron las conquistas económicas y políticas alcanzadas por el proletariado en más de un siglo de ingente batallar.

Ya se están presentando algunos fenómenos que hacen avizorar los tiempos tormentosos que se acercan, no solo por la confrontación entre las potencias sino por el papel que jugarán los pueblos, y a su cabeza el obrerismo, para impedir la guerra con su lucha revolucionaria o para sacar provecho de la hecatombe para desarrollar su revolución.

En la edición del 2 de diciembre de la conocida publicación de la gran burguesía imperialista *The Economist* aparece un artículo titulado *Bienvenido a una época dorada para los trabajadores* en el que se destacan algunos fenómenos que pueden tener consecuencias bienhechoras para la lucha proletaria, así, desde luego, no sea ese el enfoque de la publicación. Veamos algunos elementos. En primer lugar que en los países ricos, debido el envejecimiento de las sociedades, la mano de obra se está volviendo escasa y mejor remunerada especialmente en los trabajos manuales difíciles de reemplazar con tecnología. Que en un sondeo hecho en 41 países por la firma especializada en empleo ManpowerGroup se encontró que el 77 % de las compañías están teniendo dos veces más dificultad para llenar las vacantes que en 2015. Que dos tercios de las



firmas industriales polacas están disminuyendo la producción por escasez de trabajadores. Que en Alemania los servicios de transporte público han disminuido debido a la escasez de conductores de buses y trenes. Que en Corea del Sur personas mayores se están manteniendo en los puestos para conjurar la escasez, así que hoy el 59 % de las personas entre 55 y 79 años de edad trabajan, cuando hace una década solo lo hacían el 53 %. Un estudio de pequeñas empresas estadounidenses encontró que más del 90 % de estas buscan retener a sus empleados. En Alemania, donde la economía está estancada desde comienzos de 2022, en los centros de empleo hay anunciadas un récord de 730 mil vacantes, y el desempleo se sitúa solo en 3 %. De ahí que también se esté presentando un auge de la inmigración en el mundo rico. En la mayoría de los países de la Oede los salarios mínimos se han mantenido o incluso han aumentado en términos reales en el reciente período inflacionario. Los países ricos están gastando billones de dólares para imprimirle velocidad a la transición verde, reducir la dependencia de China y crear trabajos; y aunque, dice la revista, esos subsidios terminan principalmente en los bolsillos de las firmas y los aranceles resultan costosos para los consumidores, ello les da a los trabajadores de las industrias protegidas un elemento útil para negociar sus condiciones laborales.

Señala que algunos investigadores están demostrando que los estrechos mercados laborales de Estados Unidos están llevando a un rápido crecimiento de los salarios, en la medida en que los trabajadores cambian de puesto buscando mejor paga, y que los más beneficiados de esto son los trabajadores más pobres. La Agencia de Empleo de Alemania mantiene una lista de puestos que están enfrentando escasez severa de trabajadores; este año añadió 48 profesiones a la lista vigente de 152. Para la mayoría de estos trabajos se requiere educación técnica más que académica; la escasez más apremiante está en las áreas de la construcción y la atención médica. Japón está ofreciendo visas limitadas para trabajadores en una docena de campos, incluyendo la

fabricación de partes de maquinaria y construcción de barcos y los salarios están subiendo más rápido que en cualquier otro momento desde hace más de tres décadas. La prima salarial que obtenían aquellos con educación universitaria ya se está reduciendo y ahora podría caer más rápido. Señala que si bien avances como la inteligencia artificial desplazan trabajadores, también genera nuevos trabajos alrededor de ella y en otras partes de la economía; las calificaciones requeridas para los nuevas tareas no son necesariamente digitales sino aquellas que mejor complementen la inteligencia artificial.

Si bien el editorial de la revista al respecto del informe señala que esto derrumba el “mito” de que el capitalismo amplía las desigualdades y llama a que no se luche por mejorar la distribución, no sea que se lleve esta época dorada a un fin prematuro, lo cierto es que el fenómeno obedece en buena parte –más allá de los nuevos trabajos creados por la revolución tecnológica y la revalorización de los trabajos manufactureros y los fenómenos demográficos–, al mencionado fin de la bonanza de la mano de obra barata de China y otras partes y a las políticas de *reshoring*, es decir de volver a traer a la metrópoli y a sus súbditos la producción “deslocalizada” durante la época dorada de la globalización. Y con el retorno también volverá al propio seno del monstruo el indeleble combate entre el capital y el trabajo.

Otra prueba de esto son los cambios que se vienen observando en las luchas sindicales en sectores que fueron golpeados arduamente por la globalización como la industria manufacturera, en los que los monopolios redujeron los salarios abrumadoramente con el chantaje del traslado de la producción, amenaza a la que sucumbió la cúpula sindical aburguesada que, por décadas, principalmente en Estados Unidos, suscribió acuerdos para determinar no el mejoramiento de las condiciones laborales sino el grado de su empeoramiento, como es el caso emblemático de la industria automotriz. Sin embargo, en el

reciente conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW, por su sigla en inglés), y las tres grandes: Ford, General Motors y Stellantis (antigua Chrysler), que llevó a una huelga escalonada a más de 50.000 operarios de los 146.000 afiliados a la UAW, en el que se planteó la recuperación de los derechos perdidos, en particular la eliminación de los salarios por niveles, acordada en medio de la crisis de 2007-2009, que condena a los trabajadores nuevos a enormes diferencias salariales y prestacionales con sus compañeros más antiguos que se desempeñan en el mismo puesto de trabajo. Todo indica que los acuerdos significaron un cambio brusco tras décadas de concesiones, y si bien no se eliminaron la totalidad de las diferencias, sí se abolieron en su mayoría los niveles salariales, al punto que muchos asalariados tendrán un alza de la paga de más del 100 %. Igualmente, el acuerdo general sobre salarios consistió en un aumento de 25 % a cuatro años y medio, con un incremento inmediato de 11 %, pero, más importante aún, con el restablecimiento del ajuste por elevación del costo de vida (COLA, por su sigla en inglés) uno de los objetivos principales de la huelga. Esto combinado llevará para 2028 a el salario para los trabajadores de producción de los USD32 actuales a USD42 por hora, un alza de más de 31 %; los trabajadores comerciales calificados llegarán a USD50 la hora; y el salario de enganche pasará de USD18 a USD28 la hora, un alza de casi el 56 %. Y ahora serán necesarios 3 años para alcanzar el salario máximo en lugar de lo 8 que regían. Los operarios de plantas de componentes, de fabricación de ejes y de centros de distribución que tenían la más baja escala, con salarios de entre USD16,25 y USD22,50 tendrán alzas de 53 % a 88 %. Los temporales de horario completo con más de 90 días de enganchados pasarán de inmediato a ser trabajadores con estatus de permanentes. También lograron avances significativos en asuntos como las pensiones, vacaciones y otros como reapertura de fábricas cerradas y ampliación de plantas de trabajadores. Suscribieron la garantía de que se pueden lanzar a la huelga si las compañías incumplen los pactos sobre inversiones y líneas

de producción en determinadas plantas y la reapertura de algunas de las clausuradas. Estos logros, entre otros, estuvieron precedidos por el triunfo, en las primeras elecciones en las que se aplicó el sistema de un afiliado un voto, de una corriente que se mostró contraria a la cúpula sindical corrupta y aburguesada de la UAW, y que ascendió bajo la consigna: "No a la corrupción, no a las concesiones, no a los niveles salariales".

Es evidente que los trabajadores automotrices tuvieron en cuenta, aparte de la ira acumulada de las bases, las nuevas condiciones internacionales, como viene sucediendo, además, en otros amplios sectores del obrerismo norteamericano. No sobra decir que estos logros en la lucha económica no se reflejan en avances políticos sustanciales, pues esta masa obrera sigue ligada al Partido Demócrata, pero seguramente en la medida que se profundice la crisis crecerá su conciencia política, como está sucediendo con sectores de la juventud que se han lanzado masivamente a apoyar al pueblo palestino con tal combatividad y claridad política, que tiene sorprendido al establecimiento, pues han señalado por ejemplo que "el régimen israelí y sus aliados son inequívocamente responsables por todo el sufrimiento y pérdida de vidas, palestinas e israelíes." Y que por solo citar otro hecho esclarecedor, en una encuesta a jóvenes de entre 18 y 29 años, realizada por Pew Research, en 2022, la mayoría se mostró favorable al socialismo frente al capitalismo.

\* \* \*

En Colombia es indudable que el movimiento sindical lleva años sumido en una crisis profunda. En ello ha tenido un rol determinante la globalización, que aquí se reflejó en la llamada apertura económica, y que para las masas proletarias se inició con el arrasamiento de caras conquistas mediante las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, normas que fueron seguidas por otras varias durante las más de tres décadas transcurridas. Pero más allá de las pérdidas de

reivindicaciones obtenidas en un siglo de batallar, la clase obrera sufrió, como en buena parte del mundo, una derrota ideológica, que llevó al escepticismo, en el mejor de los casos, y a la apostasía y la desertión en el peor. Se cuentan por decenas las pérdidas sufridas de derechos ganados en franca lid y con sangre, muchos de los cuales se ofrendaron en el altar de la llamada concertación, incluso por parte de los sindicatos de más larga tradición de lucha. Es posible que la brutal embestida no se hubiera podido detener, ante todo, por el desfavorable entorno internacional, caracterizado por la traición y la consecuente derrota del socialismo, la caída de la Unión Soviética y el resurgir de la hegemonía gringa; pero el daño a la moral de los proletarios hubiera podido evitarse si los nuevos vientos se hubieran enfrentado con arrojo y consecuencia, si se hubiera vendido cara la derrota.

Por eso no es de extrañar que el papel del movimiento sindical haya sido tan lánguido en el estallido social iniciado a finales de 2019 y que llegó a su punto cumbre en los meses de abril, mayo y junio de 2021. Baste recordar que a la lucha contra las reformas duquistas, exigidas por la patronal y el imperialismo por medio de las entidades multilaterales, la dirigencia de las centrales fue llevada a remolque por sectores políticos, sociales y populares que se mostraron más sintonizados con lo que estaba ocurriendo y trabajaron arduamente para provocar el levantamiento juvenil y popular que caracterizó dichas jornadas. Son también incontables las veces que durante este auge de la lucha el Comando Unitario adoptó una posición apaciguadora y se inclinó a ponerles fin a las movilizaciones cuando estas aún rebosaban de energía. De ahí, el franco rechazo que en muchas ocasiones recibió de los sectores más comprometidos con el movimiento.

En la nueva situación política del país bastaría con analizar, desprendiéndose de dogmatismos y sectarismos, las ejecutorias del gobierno del Cambio para abandonar la posición acrítica mantenida hasta ahora. No se trata, desde luego, de caer en las infames posiciones de la derecha,

que se ha mostrado bastante activa en todas las centrales, sino de oponerse sin miramientos a las medidas que afectan a los trabajadores y a las masas populares y de rechazar las veleidades del acuerdo nacional que solo favorecen a los magnates, y con más veras al expreso alineamiento del gobierno con el imperialismo norteamericano, en medio de una situación en la que en los más diversos puntos del globo, incluida América Latina, se desarrollan movimientos y alianzas entre países que buscan desasirse del yugo neocolonial estadounidense, como sucede con los Brics, para solo citar un caso relevante.

Y desde luego que es hora de retomar la lucha por la reconquista de los derechos económicos y políticos perdidos. Para ello se hace necesaria una seria rectificación, si de verdad se busca servir a los intereses de la clase obrera, las masas populares y la nación.

## QUÉ HACER

El camino escogido por el presidente Petro lleva a la encerrona. Lo mejor es elaborar una plataforma clara de lucha, que garantice el fin del señorío de los monopolios sobre el país, de la abusiva injerencia gringa, que convoque a la unidad nacional a los defensores de estos postulados, no a sus enemigos. Que reivindique de esa manera la más amplia unidad y que cierre el paso a los traidores que siempre se cuelan en estas gestas. En el corazón de las faenas revolucionarias será necesario un partido organizado y conformado por cuadros convencidos y resueltos. Tareas difíciles, pero que a la postre han de garantizar un cambio de verdad, no de mentirijillas.

Prestos a aportar el grano de arena en esa gran empresa transformadora, proponemos como medidas urgentes:

- Proclamar el apremio de una política que defienda denodadamente los intereses de las masas laboriosas y de los pequeños y medianos propietarios y no sea obsecuente con los poderosos.

■ Construir un partido organizado y firme y una gran alianza que levante las banderas contra el expolio y las vacilaciones.

■ Elaborar un programa mínimo de lucha que contenga, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

1. Rechazar injerencia de Estados Unidos en Colombia, oponerse a la presencia de bases militares norteamericanas en el territorio nacional, especialmente en Amazonas y Gorgona, y rechazar la entrega de selvas y territorios a compañías, ONG, fundaciones, organismos multilaterales, so pretexto de rebajas de la deuda.

2. Negarse a suscribir documentos en los que se difama a otros pueblos y se alebrestan los ánimos contra ellos.

3. Desenmascarar a quienes trabajan a sueldo de entidades o fundaciones norteamericanas.

4. Estrechar lazos con pueblos y gobiernos latinoamericanos amigos de la paz y la soberanía.

5. Propender a unirse con pueblos, organizaciones y gobiernos que busquen sacudirse el yugo de dominio yanqui y mantenerse independientes.

6. Exigir el retiro de Colombia de la Alianza para la Prosperidad de las Américas, APEP.

7. Oponerse al pago de la deuda.

8. Luchar por eliminar las EPS, las AFP, las ARL.

9. Luchar por desprivatizar los servicios públicos.

10. Luchar por nacionalizar la banca y los grandes monopolios nacionales y extranjeros.

11. Luchar por nacionalizar los recursos naturales, las minas, los bosques, los ríos y por proteger el medio ambiente.

12. Respaldar e impulsar las luchas de los trabajadores en general por mejores condiciones de vida y de trabajo, por la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas del transporte y de los servicios públicos.

13. Exigir aumento de sueldos y salarios, rechazar las políticas que buscan reducir el salario mínimo, el cual debe cubrir, al menos, el valor de la canasta familiar.

14. Luchar por los derechos de organización, contratación colectiva y huelga de la clase obrera.

15. Exigir la aplicación de la carrera administrativa imparcial y con garantías de igualdad, así como la estabilidad laboral para los empleados del sector público.

16. Denunciar y combatir la sobrecarga y el acoso laboral.

17. Exigir la contratación a término indefinido, con protección efectiva contra el despido sin justa causa y abolir toda forma de subcontratación.

18. El pago del recargo nocturno debe aplicarse de inmediato a partir de las 6 pm, y el de los dominicales y festivos del 100 % sobre el salario ordinario.

19. Conquistar la plena vigencia de las libertades democráticas y las garantías ciudadanas, el respeto al derecho de organización popular, de reunión, manifestación y libre expresión para el pueblo.

20. Constituir un único fondo público de ahorro pensional. No se deben permitir los fondos privados. Oponerse al aumento de la edad, las semanas de cotización y al monto de esta, a la rebaja de las mesadas y a cualquier cambio que desmejore el ingreso base de liquidación actual. El régimen de pensiones debe ser exclusivamente de prima media. El Estado debe proveer cobertura universal de pensiones, con no menos de un salario mínimo, a todos los colombianos que cumplan la edad actualmente establecida para jubilarse.

21. La atención de la salud debe ser un derecho de todo colombiano, tiene que ser universal y gratuita y el Estado deberá garantizarla en todos los niveles de complejidad. En la actualidad deberán exigirse los puntos planteados en el acápite correspondiente de estas tesis.

22. Luchar por una reforma agraria democrática que, con base en la confiscación de la propiedad terrateniente, entregue la tierra a los campesinos que la trabajan y a las comunidades indígenas y negras y los provea de crédito fácil y barato, maquinaria agrícola, apoyo a la comercialización, servicios de salud, asistencia técnica. Asimismo, exigir la titulación

gratuita de las tierras tomadas por los campesinos, indígenas y negros y el respeto a sus organizaciones de masas.

23. La política estatal debe garantizar la producción suficiente de alimentos y materias primas para suplir las necesidades del país.

24. Apoyar la lucha de los asalariados agrícolas por la plena vigencia de los derechos laborales y la jornada de ocho horas en el campo.

25. Apoyar todas las luchas democráticas de las masas y de las minorías indígenas y negras en defensa de sus tierras, intereses y derechos.

26. Respetar los derechos de todos los grupos étnicos y fomentar la fraternidad y solidaridad entre ellos.

27. Propugnar por la igualdad de derechos para la mujer colombiana.

28. Apoyar las luchas de las masas populares por la vivienda y por una reforma urbana que suprima los pulpos urbanizadores y la especulación con la tierra en las ciudades y facilite la adquisición de vivienda adecuada.

29. Respalda a los estudiantes, profesores y a todo el pueblo colombiano en su lucha por una enseñanza estatal gratuita, obligatoria y del más alto nivel académico, y por la ampliación del presupuesto para la educación pública y la

elevación del nivel de vida de los educadores; en consecuencia, eliminar la privatización de la universidad y la intromisión académica y financiera de las instituciones imperialistas y retardatarias dentro de ellas, y por incrementar el presupuesto para educación de acuerdo con las necesidades de enseñanza universal y gratuita en todos los niveles.

30. Apoyar una reforma de la educación de contenido popular y democrático que estimule la investigación y el desarrollo agrario, industrial, cultural y científico y que impulse el florecimiento de una cultura que sirva a los intereses supremos de la liberación nacional. Impulsar y desarrollar el deporte masivo.

31. El Estado debe garantizar el desarrollo científico y tecnológico y el mejoramiento genético para beneficio del país.

32. Luchar por una reforma que suprima los tributos indirectos y que establezca un impuesto de renta progresivo a partir de ingresos equivalentes a diez salarios mínimos. Oponerse a cualquier reducción de impuestos y a toda clase de exenciones sobre los mismos al capital monopolista.

33. Oponerse a la xenofobia y al racismo y a toda clase de discriminación, especialmente a los comunidades negras y pueblos indígenas.